



© AFP PHOTO / MONJUC

Entierro del periodista congoleño Serge Maheshe, de Radio Okapi, asesinado el 13 de junio de 2007 en Bukavu.

Informe anual 2008

AFRICA

REPRESIÓN SIN COMPLEJOS

Lo que no se atrevían a hacer antes, los gobiernos africanos lo hacen ahora. Las barreras que no se atrevían a franquear en la represión de los periodistas que molestan, han caído. Sin complejos, varios ministros de Información, se las han saltado todo el año para defender una determinada idea de Africa. La que tiene el rostro de la represión. Que la prensa es insolente, pues se la castiga. Que los periodistas reivindicaban, pues se les amordaza. Incluso en Mali y Benin, países que antes se consideraban modelos en el respeto a la libertad de prensa, en 2007 los presidentes Amadou Toumani Touré y Yayi Boni levantaron al menos una vez sus teléfonos para enviar a la cárcel a periodistas desagradables. En ambos casos, los jefes de Estado asumieron su decisión. El año ha sido, pues, el de la audacia en la represión y el desentendimiento consciente de los compromisos asumidos. Vamos, lo que se dice gobernar sin molestias.

Para algunos, es una costumbre. De paso por Europa, en mayo, el presidente de la joven república de Eritrea, Issaias Afeworki, culpable de haber hecho encarcelar a sus antiguos compañeros de armas, y a los periodistas que no tuvieron la suerte de escapar a la policía, dio muestras de un total desprecio hacia las preguntas de la prensa relativas a los derechos humanos en su país. Podía permitírselo porque, salvo Estados Unidos, no son muchos los que utilizan palabras duras al referirse a él. Los gobiernos democráticos se confiesan impotentes frente a su brutalidad. Durante este tiempo, Eritrea, que al correr de los años se ha convertido en una cárcel a la intemperie, continúa vaciándose de habitantes. Quienes no sucumbieron a las inhumanas condiciones de detención de los campos penitenciarios huyeron, a pie, para encontrar refugio en cualquier parte, incluidas la miseria o la muerte. Por su parte, su hermano y enemigo Meles Zenawi, Primer Ministro de la República Federal Democrática de Etiopía, ha continuado tratando a la prensa de Addis Abéba con gran condescendencia. Incluso si, presionado por sus aliados norteamericanos, aceptó la puesta en libertad de los periodistas que cayeron en la redada de noviembre de 2005, en las manifestaciones de la oposición que protestaban por el fraude electoral de unos meses antes.

En Zimbabue y Gambia, los presidentes Robert Mugabe y Yahya Jammeh no aflojaron la garra de sus todopoderosos servicios de inteligencia, que amenazan a una prensa independiente herida y humillada, a la que tienen cogida por el cuello. El presidente Joseph Kabila, en la República Democrática del Congo, nunca sintió demasiada estima por los testigos molestos, ni por los clavos en el zapato que son los periodistas. En este año, incluso los que cayeron bajo los disparos de asesinos no identificados, como Serge Maheshe, de *Radio Okapi*, no consiguieron otra cosa que la desdénosa indiferencia de las autoridades. En cuanto al jefe del gobierno de transición Abdullahi Yusuf Ahmed, de una Somalia atomizada por diecisiete años de anarquía, ha mantenido la brida al cuello de sus militares, que se dedicaron a placer a detener a los periodistas que se cruzaban en su camino. Paralelamente, otros cayeron por los disparos de asesinos a sueldo pagados, desde su exilio dorado de Asmara, por los jefes de los tribunales islámicos.

En Ruanda, el presidente Paul Kagame vigila con gran nerviosismo que, los escasos periódicos que todavía no controlan su gobierno o las personas más cercanas a él, se vean lo suficientemente intimidados como para callarse. Por su parte, los potentados Teodoro Obiang Nguéma en Guinea Ecuatorial e Ismaël Omar Guelleh en Djibouti, está claro que no sienten ninguna preocupación por los eventuales redactores jefes que se han vuelto indóciles. Se contentan con las adulaciones de sus medios de comunicación públicos. Todos cuantos no le cantan loas públicamente se ganan el derecho a que les abran unas diligencias personales, en la oficina del jefe de la policía o del fiscal de la República.

LA INFAMIA Y LA CÁRCEL

Si los “predadores” africanos de la libertad de prensa no se han desarmado, algunos hombres de poder, a los que se suponía al margen de toda sospecha, han demostrado que los periodistas del continente siguen careciendo de libertad. Especialmente quienes se pensaba que estaban convencidos de que un país pobre puede obtener beneficios de la diversidad informativa, los debates públicos controlados, la transparencia de la cosa pública y la vigilancia de unos ciudadanos exigentes. Enfrentado a una rebelión que se niega a reconocer como movimiento político, el presidente de Níger, Mamadou Tandja, hizo así encarcelar y juzgar a varios periodistas, nigerinos o extranjeros, que habían mostrado excesivo interés por esos “traficantes de droga” que humillan al ejército en las montañas de Aír. Él, que no quería ni oír hablar de la crisis que gangrena su frágil democracia, generó en la opinión pública internacional un amplio movimiento de interés por la cuestión tuareg.

De presidentes como José Eduardo dos Santos en Angola, Abdoulaye Wade en Senegal, Idriss Deby Itno en Chad, Omar al-Béehir en Soudan u Omar Bongo en Gabon, por ejemplo, esperábamos al menos que dejaran de gestionar el Estado como si fuera un bien personal, y de tratar a los periodistas de sus países como si fueran sus criados. Pero hay que suponer que el argumento tampoco consiguió convencerles porque, en todos esos países, los periodistas pasaron por la detención, con frecuencia brutal, la inculpación, a menudo extravagante, y la cárcel, siempre penosa. Sin embargo, esos jefes de Estado no son déspotas ni reyezuelos de opereta. Pero han violado sus respectivas Constituciones, que garantizan la libertad de prensa, las promesas hechas a quienes les prestan ayuda económica y los estándares democráticos preconizados por la ONU, con modernidad, refinamiento y gran despliegue de sofisticación administrativa. Y siempre con una justificación que esgrimir.

Los periodistas africanos — eternamente imputados de “difamación”, “publicación de noticias falsas”, “imputaciones dañinas”, “ofensa al Jefe del Estado”, “atentado a la seguridad nacional”, “sedición”, “incitación a alterar el orden público” o quien sabe qué más — tuvieron que gestionar solos sus propios asuntos. Inocentes o culpables, pasaron por la mugre de las celdas carcelarias. Sus familias, cuya principal característica es que no están bañadas de oro, tuvieron que arreglárselas para suplir, con sus propios medios, la falta de ingresos durante su ausencia.

Sí, en todo el continente y especialmente en el mundo francófono, existen muchas publicaciones escandalosas, alimentadas por la corrupción ordinaria, ávidas de titulares espectaculares y “sobres”. Pero los políticos, de Madagascar a Mauritania, de Guinea a Camerún, pasando por Costa de Marfil y la República Centroafricana, son los primeros beneficiarios al servirse de los periodistas, poco y mal pagados, para arreglar cuentas con sus adversarios a base de falsas “revelaciones”. Lo hacen porque disponen de medios para ello, y sacan buenos réditos. La infamia y la cárcel quedan para los demás. Una lógica absurda, una justicia injusta.

IMPUNIDAD ECONÓMICA

En 2007, la libertad de prensa en Africa resultó gravemente herida. Al menos doce veces durante el año algunos hombres recibieron la orden de abatir a periodistas. Más de ciento cincuenta veces, las unidades de policía recibieron orden de detener, no a un ministro corrupto o a un notorio asesino, sino a un periodista. Incluso los gobiernos de los países en los que Reporteros sin Fronteras había depositado su esperanza en años anteriores, utilizaron los instrumentos de la represión contra la prensa. Excepto unos pocos países, como Gana o Namibia, entre otros, el año estuvo marcado por un retroceso generalizado. ¿Qué ha pasado ?

La penetración cada vez más profunda de China, superpotencia opresiva donde las haya, ha permitido que determinados gobiernos africanos marginen a sus apoyos occidentales. Agobiados por indignadas ONG's y virtuosas exigencias políticas, los países democráticos no dan la talla frente a los dólares, llegados con profusión, y las multinacionales de Pekín, que envían obreros chinos para dirigir las obras de infraestructura africanas, sin pedir nada a cambio. Y luego es que, en materia de represión, China se ha convertido en una experta. Hay técnicos chinos que interfieren la señal de los radios de la oposición en Zimbabue. Además, la difícil liquidación del pasado criminal de las antiguas potencias coloniales ha encontrado un nuevo aguijón en el renacimiento del nacionalismo africano. En nombre del rechazo de la “Francáfrica”, ¿a cuantas embajadas de Francia las han enviado a sus queridos estudios cuando han intentado negociar la libertad de un periodista? Las embajadas de China no tienen ese problema. ¿A cuantos periodistas africanos, o reporteros extranjeros, se les ha acusado de espías británicos en Zimbabue ? Sería un error no tomarse esas insinuaciones en serio. A comienzos del año 2008, un periódico fanático de Abiyán ensució la memoria de Jean Hélène, corresponsal de *RFI* cobardemente asesinado por un gendarme en octubre de 2003, pretendiendo que, en aquel momento, se encontraba de servicio por cuenta de los servicios franceses de inteligencia.

Los medios de comunicación de Africa, como una presa que se pulveriza, han hecho agua. Algunos tabúes se han roto con orgullo. Tras un año agotador, siguen sin respuesta multitud de cuestiones vitales para el futuro de la libertad de prensa en el continente

Léonard Vincent
Responsable del despacho Africa

CHAD

Superficie : 1.284.200 km².

Población : 10.468.000.

Idioma : francés.

Jefe del Estado : Idriss Déby Itno.

El caso de “El Arca de Zoé” llevó a la cárcel, al mismo tiempo que a los responsables franceses de la asociación, a tres periodistas llegados para cubrir su clandestina operación. Por otra parte, la policía chadiana no duda en proceder a la detención de los periodistas que el poder considera como los más turbulentos.

Para los periódicos de Yamena, el año 2007 comenzó con malos auspicios. La escasas publicaciones de la capital, obligadas a publicarse con tachones negros según el criterio de unos celosos funcionarios, se encontraban en una difícil situación económica. Estaban sometidas a la supervisión de un comité de censura previa, restablecido en el marco de la proclamación del estado de excepción. Decretado el 13 de noviembre de 2006, como consecuencia de una oleada de enfrentamientos mortales entre comunidades árabes y no árabes del este del país, el estado de excepción permitió también prohibir que las radios y las televisiones mencionaran las cuestiones que “pueden atentar contra el orden público, la unidad nacional, la integridad del territorio y el respeto a las instituciones republicanas”.

Exceptuando al diario progubernamental *Le Progrès*, los periódicos de la capital aparecían con muchos artículos amputados cuando, aprovechando ese estado de excepción, las autoridades de Moissala (Sur) procedieron a la primera y última actuación coercitiva en una de las radios privadas del país. El 31 de enero, la gendarmería detuvo a Marcel Ngargoto, periodista de la emisora comunitaria *Radio Brakoss* y secretario general de la asociación Derechos del Hombre sin Fronteras (DHSF). Las autoridades locales reprochaban al periodista “la brutalidad con que trata determinadas informaciones sensibles que pueden atentar a la cohesión nacional”. Su detención era, entre otras cosas, consecuencia de la severidad del periodista con el comandante de la gendarmería de la ciudad, al que había acusado de extorsionar dinero a algunos habitantes. Quedó en libertad el 19 de mayo, después de hacer huelga de hambre durante algunos días.

El estado de excepción terminó el 25 de mayo a media noche sin que el gobierno, conforme a la Constitución y consciente de que no iba a resta-

blecer la paz a tijeretazos, pidiera su prolongación a la Asamblea Nacional. Ese mismo día dejó de funcionar la célula especial del Ministerio de Comunicación, creada para proceder a la censura de los periódicos. Los periódicos chadianos pudieron de nuevo publicarse normalmente.

UNOS PRESOS INOPORTUNOS

Pero el caso más espectacular tuvo lugar a finales de octubre, al margen del escándalo de “El Arca de Zoé”, una asociación francesa que había planeado llevarse ilegalmente a Francia a un centenar de niños de Darfour, supuestamente huérfanos. Llegados para cubrir esa operación clandestina, Marc Garmirian, periodista reportero de imágenes de la agencia *Capa*, Jean-Daniel Guillou, fotógrafo de la agencia *Synchro X*, y Marie-Agnès Peleran, periodista de *France 3 Méditerranée* (que se encontraba en Chad para hacer un documental sobre su experiencia de familia de acogida de uno de los “huérfanos”), fueron detenidos con los miembros de la asociación, e inculcados de los mismos cargos. Mientras tanto, varios periodistas extranjeros llegados para cubrir el asunto, fueron víctimas de amenazas o agresiones de los manifestantes chadianos, calientes con el caso y con la forma en que lo explotaba el gobierno de Yamena. Tras una fuerte movilización internacional, y la implicación personal del Presidente de la República francesa, la justicia chadiana puso en libertad a los tres periodistas que habían caído en la trampa de “El Arca de Zoé”, y después decidió el sobreseimiento de su causa.

Chad ha pasado, en los últimos años, por un clima de desconfianza permanente entre las autoridades y una prensa privada, en ocasiones turbulenta, que tiene una tirada muy limitada y se publica esencialmente en la capital. Son frecuentes las amenazas y los actos de intimidación, a imagen y semejanza del atentado que, a principios de octubre, tenía como

CHAD

objetivo el vehículo de Michael Didama, director de publicación del semanario privado *Le Temps*. Mientras se encontraba de viaje en el extranjero, unos desconocidos ametrallaron y después incendiaron su coche.

El año 2007 terminó con otra detención. Nadjikimo Benoudjita, director de publicación del semanario privado *Notre Temps*, fue detenido el 14 de diciembre e inculpado, tres días más tarde, de “incitación al odio tribal y religioso” ; después quedó en libertad provisional, en espera de que le

citen a comparecer. Mientras estaba detenido, la policía judicial registró su domicilio, donde también se encuentra la redacción de *Notre Temps*. Los policías explicaron entonces a Nguémadki Dkimasngar, redactor jefe de este periódico de tirada limitada, la decisión del Ministro de Información y Seguridad Pública de ordenar “pura y simplemente el cierre del periódico”. Después, Nadjikimo Benoudjita abandonó Chad, satisfaciendo así el deseo del gobierno de desembarazarse de un crítico acerbo sin tener que cargar con un preso muy político.



ERITREA

Superficie : 117.600 km².

Población : 4.400.000.

Idioma : tigríño.

Jefe del Estado : Issaias Afeworki.

Por primera vez, este pequeño país del Cuerno de Africa, dirigido desde su independencia por Issaias Afeworki, figura en el último puesto de la clasificación mundial de la libertad de prensa, establecida por Reporteros sin Fronteras. La razón es muy simple : la situación no cesa de empeorar. El país ha estado cortado del mundo tras las grandes razias de septiembre de 2001, y al menos cuatro periodistas han muerto mientras permanecían detenidos.

Todas las esperanzas que los eritreos depositaron en la independencia de su país, conseguida a base de mucha lucha el 24 de mayo de 1993 y después de treinta años de guerrilla, se han hundido. El 18 de septiembre de 2001, el presidente Issaias Afeworki y sus colaboradores más cercanos pusieron en marcha la política de persecuciones del ala reformista del partido en el poder. Acababa de terminar la guerra con Etiopía y cada vez eran más numerosos los que reclamaban la libertad. La capital se convirtió en un coto de caza a los opositores, o supuestamente opositores. Algunos antiguos compañeros de armas de los ministros y sus consejeros, así como de los generales influyentes, fueron arrojados a las cárceles. Se suspendió el puñado de periódicos independientes que se publicaban en Asmara, la capital. Detuvieron a sus directores y redactores jefes. Ahora, cualquier crítica del régimen se tacha de "atentado a la seguridad nacional". Además de cientos de personalidades políticas o militares, trece periodistas no pudieron escapar a las razias, o se rindieron a las autoridades. Todos ellos estuvieron internados en la cárcel n° 1 de Asmara antes de que, en abril de 2002, les trasladaran a centros de detención secretos, por tener la audacia de reclamar que les juzgaran. Desde entonces, han desaparecido.

MUERTOS EN PRISIÓN

Las informaciones procedentes de Eritrea son tan escasas como escalofriantes. En 2006, unos guardianes de prisiones que huyeron al extranjero revelaron que al menos tres de los periodistas detenidos en 2001 habían muerto en la cárcel, entre 2005 y 2006. El 11 de enero, le llegó el momento de sucumbir a sus condiciones de detención, extremadamente difíciles, a una de las mayores figuras de la vida intelectual del país.

Fessehayeh Yohannes, apodado "Joshua", cofundador del seuario *Setit*, poeta, dramaturgo y director de una compañía de teatro, no logró sobrevivir al presidio de Eiraeiro, en el nordeste del país, donde estarían internados los presos más importantes. A su familia no le informaron, ni le han devuelto el cuerpo. Esa terrorífica situación ha hecho que, por primera vez desde que Reporteros sin Fronteras estableció una clasificación mundial de la libertad de prensa, Eritrea ocupe el último lugar, justo después de Corea del Norte.

Los pocos corresponsales extranjeros destinados en Asmara tienen que rendir cuentas directamente al Ministro de Información en ejercicio, Ali Abdu quien, a la menor desviación, no duda en suspender las autorizaciones de trabajo. Sus interlocutores se exponen a ser inmediatamente encarcelados. Ir a Eritrea requiere meses de paciencia, durante los cuales los periodistas tienen que convencer a los embajadores eritreos, destinados en sus respectivos países, de los beneficios que pueden suponer para el gobierno los reportajes que pretenden realizar. Quienes se consideran culpables de hacer referencia en sus artículos al ruinoso estado de las libertades civiles y políticas, son expulsados.

UNA CÁRCEL A LA INTEMPERIE

Los eritreos se ven obligados a vivir aislados, en una cárcel a la intemperie donde los medios públicos de comunicación se han convertido en instrumentos de propaganda al estilo soviético. Bajo la estrecha vigilancia de Ali Abdu, los trabajadores de la televisión pública *Eri-TV*, la radio *Dimtsi Hafash* (*La Voz de la Grandes Masas*) y algunos diarios gubernamentales, se han transformado en soldados del gobierno. El presidente, sus principales



ERITREA

consejeros y los militares cultivan, gracias a esos medios, la paranoia de la agresión etiope permanente, los que les permite mantenerse en el poder. El temor a una guerra inminente se ve así alimentado diariamente y se trasmite a la diáspora, que es el principal apoyo económico del gobierno.

Se entiende entonces por qué, ante tanto desastre, el país se va vaciando poco a poco. Cada semana, 120 solicitantes de asilo se suman a los 130.000 fugitivos que ya viven en las tiendas del ACNUR en Sudán. Soldados desertores, adolescentes que huyen de una leva que no termina nunca, ex prisioneros, profesores universitarios, artistas, campesinos, deportistas, todas las categorías sociales se hacinan en los campos de los Estados vecinos, en espera de que les acepte un país de acogida. Muchos periodistas de los medios públicos, que ya no soportaban el ahogo impuesto por el gobierno, también han optado por el camino del exilio. Algunos huyen a pie, siguiendo la ruta abierta por quienes se dedican a pasar gente, hasta Sudán o Etiopía, corriendo el riesgo de verse abatidos por la patrullas de guardias fronterizos, que tienen orden de dispara en cuanto les ven. O bien de que les detengan, como a Eyob Kessete, periodista del servicio en lengua amarica de *Dimtsi Hafash*, o a Johnny Hisabu, montador de *Eri-TV*, ambos encarcelados en algún lugar del país desde su captura, en algún momento del año. En junio, ese periplo clandestino le costó la vida a Paulos Kidane, periodista del servicio en amarica de *Eri-TV*. Tras seis días de marcha, agotado y enfermo de epilepsia, tuvo que abandonar a sus compañeros a pocos kilómetros de la frontera. Se quedó cerca de un pueblo, esperando recobrar las fuerzas para continuar el camino. Durante algunas semanas no se supo nada de él, hasta que a finales de junio el Ministerio de Información eritreo anunció a la familia, y al personal de los medios públicos, su “fallecimiento accidental”.

Paulos Kidane era uno de los periodistas más populares de Asmara. Sin embargo había optado por macharse del país, después de formar parte de los nueve trabajadores de medios públicos detenidos a partir del 12 de noviembre de 2006, como

consecuencia de las espectaculares defecciones de otros varios periodistas célebres. Las autoridades les detuvieron como sospechosos de permanecer en contacto con los fugitivos, o de intentar huir ellos también. Según el relato que hizo a Reporteros sin Fronteras después de que le pusieron en libertad, al periodista y sus colegas les “pegaron y torturaron en la cárcel, por negarse a facilitar las contraseñas de (sus) correos electrónicos”. “Finalmente cedimos, porque el dolor era demasiado intenso”, añadió. Después de su puesta en libertad con fianza, a los “presos de noviembre” les estuvieron siguiendo y sometieron sus teléfonos a escuchas. Se les obligó a regresar a sus trabajos y se les prohibió formalmente marcharse de la ciudad de Asmara. De los nueve periodistas detenidos, tan solo siete salieron en libertad. A la joven Fetiha Khaled, presentadora del servicio en árabe de *Eri-TV*, la enrolaron a la fuerza en el ejército. En cuanto a Daniel Mussie, del servicio en oromo de *Dimtsi Hafash*, nunca ha salido de la cárcel.

FRACASO EUROPEO

La tragedia pone de manifiesto el flagrante fracaso de la “diplomacia silenciosa”, adoptada entre otros por la Unión Europea. El comisario europeo Louis Michel aprobó, en mayo, unos programas de ayuda al desarrollo por un montante de 122 millones de euros, para cinco años. En contrapartida, la UE pidió al gobierno eritreo que “llevara a cabo una gestión constructiva en la resolución de las crisis regionales, así como que efectuara progresos en materia de derechos humanos y libertad de prensa”. Pero el 4 de mayo, día de la firma del acuerdo, el presidente eritreo contestó con desprecio a las críticas que los periodistas europeos hicieron a la situación de los derechos humanos en su país, en una conferencia de prensa conjunta en Bruselas con Louis Michel, quien sin embargo se declaró “muy, muy honrado” de recibir a Issaias Afeworki en la Comisión. Como reacción, Reporteros sin Fronteras está ahora luchando para que el presidente eritreo y sus ministros sean considerados *personae non gratae* en territorio europeo.



ETIOPÍA

Superficie : 1.104.300 km².

Población : 81.021.000.

Idioma : amarica.

Jefe del gobierno : Méles Zenawi.

La crisis abierta en noviembre de 2005 por la detención de una veintena de responsables de periódicos terminó honrosamente en 2007, gracias a la presión internacional. Pero el clima sigue siendo malo y la autocensura frecuente. Además, hay dos periodistas eritreos que continúan siendo utilizados como rehenes, tras haber sido capturados en Somalia.

Está claro que la Etiopía de Meles Zenawi no es la dictadura de Mengistu, derrocada en 1991, que mantenía sobre el país una capa de plomo de estilo estalinista. Mejor o peor, algunos periódicos privados animan la vida intelectual de la capital, Addis-Abeba. Pero el clima tiende a la hostilidad. Siguen estando previstas condenas graves de cárcel, para cualquiera a quien una justicia influenciable considere culpable de “difamación” o de “publicación de noticias falsas”. La autocensura es muy fuerte. Los corresponsales extranjeros destinados en Etiopía deben ser prudentes y no estorbar al gobierno, que está enfrentado a múltiples crisis militares, en las provincias y en la región, y que da muestras de una gran severidad con los periodistas que considera peligrosos.

UNA RELATIVA DISTENSIÓN

En el año 2007 hubo una relativa distensión. Desde hacía dos años, la atención de la comunidad internacional estaba centrada en el hecho de que el estado mayor de la principal coalición de la oposición, y los responsables de los periódicos que la apoyaban, se encontraban en la cárcel inculcados de unos extravagantes cargos que podían costarles la pena capital. Pero, mientras se encontraban detenidos en condiciones muy penosas y tratados con desprecio por el gobierno, el Alto Tribunal Federal decidió en abril la absolución de veinticinco de los acusados en el gran proceso político que se desarrollaba en Addis-Abeba desde hacía un año. Inculcados de “genocidio”, “alta traición” e “intento de cambiar el orden constitucional”, todos ellos llevaban encarcelos desde noviembre de 2005, después de que les detuvieran en las razias que siguieron a la represión policial de las concentraciones de protesta organizadas por la principal coalición de la oposición, la Coalición para la Unidad y la Democracia (CUD, Kinijit en

lengua amarica). Ocho de las 25 personas liberadas eran periodistas. El tribunal consideró que el fiscal no había presentado pruebas convincentes de su culpabilidad. Parecía haberse franqueado una primera etapa para resolver una crisis que estaba emponzoñando la vida política etíope.

El 16 de julio se produjo un golpe teatral : conociendo, con estupefacción, la condena de seis periodistas, entre cuarenta y tres opositores juzgados en un caso idéntico, a penas que iban de dieciocho meses de cárcel a cadena perpetua. La mayoría de ellos fueron considerados culpables de intentar “cambiar el orden constitucional”. Sin embargo, el día 20 quedaron en libertad cuatro de ellos a los que se les aplicó una amnistía ; los dos últimos, en el exilio, fueron juzgados en rebeldía. Un mes después les llegó la libertad, en forma de gracia presidencial, a los tres últimos periodistas detenidos desde 2005. La crisis, que duraba ya 22 meses, acababa de encontrar una salida definitiva.

Hay que decir que, incluso para los asuntos de prensa más normales, el gobierno etíope dispone de un arsenal legislativo muy severo y que no duda en utilizarlo para desembarazarse de periodistas molestos, dispuestos a desenterrar viejos asuntos. Ese tipo de cómodas maniobras es una práctica frecuente. En enero, el Tribunal Supremo rechazó la apelación de Abraham Reta, periodista del semanario privado *Addis Admas*, contra su condena, en mayo de 2006, a un año de cárcel por “difamación”, por un artículo publicado en 2002, cuando era redactor jefe del semanario *Ruh*. Se le acusó de haber citado sin pruebas el nombre de tres funcionarios, supuestamente implicados en un caso de corrupción. Detenido una primera vez en abril de 2006, cumplió tres meses de cárcel ante de que le dejaran en libertad condicional, en espera de los resultados de la apelación. Después de varias



ETIOPÍA

audiencias, en las que Abraham Reta se declaró no culpable y se vio obligado a identificar la fuente de su artículo, volvieron a enviarle a la cárcel para cumplir los nueve últimos meses de la condena. Entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006, Reporteros sin Fronteras contabilizó cuatro casos de periodistas enviados a la cárcel para cumplir condenas largas (entre ocho y dieciocho meses) por asuntos que tenían cuatro años de antigüedad. Después, todos recobraron la libertad, pero ahora es impensable que puedan reanudar su trabajo de periodistas.

REHENES COGIDOS EN SOMALIA

La tímida apertura del gobierno etíope al final del año (creación de una radio privada independiente, reedición de la ley de prensa) no debería ocultar que Etiopía es un país donde el ejercicio del periodismo choca rápidamente con unas autoridades, por lo menos nerviosas.

El deterioro del clima político alcanza sistemáticamente a las filas de la prensa. El envío del ejército etíope a Somalia, a finales de diciembre de 2006, para apoyar a las tropas del gobierno de transición, fue un foco de tensiones suplementarias. Y el apoyo político y militar del hermano enemigo eritreo a la Unión de los tribunales islámicos somalíes exacerbó la situación, hasta el punto de que las tropas etíopes tomaron como rehenes a dos periodistas de los medios públicos de Asmara, cuando intentaban huir de la zona de los combates.

Saleh Idris Gama, periodista de la televisión pública eritrea *Eri-TV*, y Tesfalidet Kidane Tesfazghi, camarógrafo, habían desaparecido a finales de 2006 en Mogadiscio. A finales de febrero de 2007, Reporteros sin Fronteras facilitó sus nombres al gobierno somalí, a fin de saber si estaban detenidos o se les había identificado entre las víctimas de los combates. Aun no había llegado respuesta a esa demanda cuando, a principios de abril, el Ministerio de Asuntos Exteriores eritreo señaló públicamente la detención de varios conciudadanos en Somalia, confirmado que los miembros del

equipo de *Eri-TV* estaban vivos. Pocos días antes, y disponiendo de una información parecida, Reporteros sin Fronteras se había dirigido a los servicios de inteligencia somalíes para conseguir información acerca de los periodistas eritreos, informándoles de su identidad y solicitando poder establecer contacto telefónico con ellos. La solicitud de la organización se vio rechazada.

Algunos días después, en un sitio progubernamental etíope se difundió un vídeo con algunas imágenes de Saleh Idris Gama y Tesfalidet Kidane Tesfazghi. El pie de foto de la entrevista les calificaba de “soldados *shabia*” (literalmente “populares”, apodo del régimen eritreo). Desde aquella fecha, ambos están detenidos por los servicios de inteligencia, en algún de Etiopía, y el gobierno de Addis-Abéba se niega a dar información sobre el tema.

Pero ellos no son los únicos periodistas encarcelados en Etiopía de los que se tiene muy poca información. Shiferraw Insermu, periodista del servicio en oromo de la televisión pública *ETV* y sospechoso de haber sido informador del movimiento separatista Oromo Liberation Front (OLF), sigue pudriéndose en la cárcel. Su colega Dhabassa Wakjira y él fueron detenidos, por primera vez, en su domicilio de Addis-Abeba, el 22 de abril de 2004. El Alto Tribunal Federal ordenó su libertad con fianza el 9 de agosto siguiente, pero solo salió Shiferraw Insermu. Detenido de nuevo el 17 de agosto, el periodista quedó en libertad por orden del Alto Tribunal Federal a mediados de octubre. Como el canal *ETV* se negó a que se reincorporara al trabajo, estaba intentando encontrar alguna actividad profesional cuando le detuvieron, por tercera vez, el 11 de enero de 2005. Desde aquella fecha permanece detenido, probablemente en la cárcel central conocida como “Kerchiele”. Dhabassa Wakjira permaneció detenido sin interrupción hasta 2006, sin que la administración penitenciaria obedeciese las diferentes órdenes de libertad provisional dictadas por la justicia. Finalmente salió en libertad y después huyó de Etiopía, y ha pedido asilo en el extranjero.



GAMBIA

Superficie : 11.300 km².

Población : 1.663.000.

Idioma : inglés.

Jefe del Estado : Yahya Jammeh

Un presidente autoritario que pretende curar el SIDA con ungüentos y lecturas del Corán, unos servicios de inteligencia temidos por sus brutales métodos, el asesinato del decano de los periodistas, que permanece impune, y una absoluta intolerancia a cualquier forma de crítica : en este espantoso clima intenta sobrevivir la prensa gambiana.

Palmeras de vértigo, immaculadas playas, una brisa marina que refresca un sol perpetuo y noches claras... Gambia, antigua colonia británica enclavada en Senegal, es un paraíso turístico, cuya fachada marina está puntuada por hoteles de lujo de y ciudades de vacaciones. Pero el país dirigido por el joven presidente Yahya Jammeh es también el dominio reservado de un régimen militar frecuentemente irracional, que encarcela, tortura y aterroriza a quienes un día osan oponerse al Jefe del Estado, o a sus amigos. El asesinato del periodista con más prestigio del país, Deyda Hydera, en la noche del 16 de diciembre de 2004, significó el fin de una época, en la que la prensa privada, bien organizada, exigente, todavía podía hacer frente a un gobierno que no escondía la hostilidad que sentía hacia ella. Desde esa fecha, prácticamente todos cuantos podían molestar al Presidente han pasado por el aro, de grado o por la fuerza, y han abandonado el país.

UN ASESINATO IMPUNE

A Deyda Hydera, director del diario privado *The Point*, corresponsal de la Agencia France-Presse (AFP) y de Reporteros sin Fronteras, le asesinaron a disparos cuando acompañaba a dos empleadas del periódico, en su coche. Anteriormente había recibido frecuentes amenazas de la National Intelligence Agency (NIA, los servicios de inteligencia), que le vigilaba pocos minutos antes de su asesinato, perpetrado en una calle que bordea un cuartel de la policía. Dos investigaciones efectuadas por Reporteros sin Fronteras en Gambia han conseguido sacar a la luz los elementos que permiten tener fuertes sospechas de la NIA, y un pequeño grupo de milicianos al servicio del presidente Yahya Jammeh. Pero no se ha hecho ninguna investigación seria para identificar a los asesinos, ni a los autores intelectuales. La única comunicación oficial de los investigadores gambianos, seis meses después del asesinato, da a entender que a Deyda Hydera, al que califica de "provocador", podían haberle matado por algunos asuntos de

moral, totalmente inventados. Con ocasión de una entrevista, concedida en enero de 2007 con motivo del año nuevo, Yahya Jammeh cargó el asesinato de Deyda Hydera en la cuenta de los "enemigos de Gambia". Añadió que los culpables tuvieron la intención de impedir que fuera elegido presidente de la Comunidad Económica de Estados del Oeste de África (CEDEAO), sin más explicaciones.

Sin que resulte posible verificarlas, entre otras cosas por culpa de la mala fe y la obstrucción de las autoridades, las informaciones más perturbadoras proceden de la propia Gambia. Así, el 12 de enero, el semanario de oposición *Foroyaa* reveló que "Chief" Ebrima Manneh, periodista del diario privado *Daily Observer*, llevaba detenido tres meses y tres semanas en la comisaría de policía de Fatoto, una pequeña ciudad que está a 400 km. al este de la capital, tras haber pasado por diferentes centros policiales desde que, el 7 de julio de 2006, le detuvo el servicio de inteligencia. Las autoridades han negado siempre tener en su poder a este periodista, sobre el que no pesa cargo alguno. Le detuvieron por un motivo inocente, poco después de la clausura de la cumbre de la Unión Africana (UA), que se celebró en Banjul. En aquel momento hubo varias detenciones en la prensa independiente, acusada de perturbar el evento. Durante el otoño de 2007, varias organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa, entre las que se encontraba Reporteros sin Fronteras, recibieron el testimonio de un antiguo preso político, afirmando haber estado internado con "Chief" Ebrima Manneh, y que éste habría "desaparecido definitivamente" después de que se llevara a un interrogatorio nocturno en la NIA.

LA POLICÍA MERODEA

Después de amordazar a los periodistas del país mediante la arbitrariedad y la violencia, el poder ataca ahora a todos los que tiene a mano. Residente en Estados Unidos desde hace una



GAMBIA

década, la periodista gambiana Fatou Jaw Manneh fue detenida el 28 de marzo, cuando bajaba del avión para acudir a los funerales de su padre. Detenida por agentes de la NIA después de que la denunciara un pasajero, fue trasladada al cuartel general de los servicios de inteligencia, en el paseo marítimo de Banjul. Ex periodista del diario privado *Daily Observer*, Fatou Jaw Manneh es una militante conocida por su compromiso prodemocrático. Colaboradora de varios sitios de Internet y del movimiento de oposición "Save The Gambia Democracy Project", en 2003 publicó un artículo en el diario, hoy cerrado ilegalmente *The Independent*, que en aquel momento provocó el arresto y la detención arbitraria, durante tres días, de su redactor jefe, Abdoulie Sey. Colaboradora ahora del sitio de Internet *AllGambian.net*, a Fatou Jaw Manneh la denunciaron por la publicación, en octubre de 2005, de un artículo en el que acusaba al presidente Yahya Jammeh de "hacer jirones nuestro querido país" ("tearing our beloved country to shreds"), y describía al Jefe del Estado como "un paquete de terror" ("a bundle of terror"). Inculpada de "intención de cometer un acto de sedición" ("intention to commit sedition"), "publicación de material sedicioso" ("publication of seditious words") y "publicación de noticias falsas con intención de provocar miedo y alarma en la opinión pública" ("publication of false news intended to create public fear and alarm"), está expuesta a tres años de cárcel. Durante todo el año 2007, su juicio ha ido de aplazamiento en aplazamiento, haciendo planear una amenaza constante sobre ella.

Los juicios sin fin son, por otra parte, una de las especialidades del gobierno, para obligar a los periodistas molestos a vivir en una inseguridad permanente. Así, fue necesario más de un año de procedimiento para que a Lamin Fatty, joven periodista de *The Independent*, le condenaran a un año de prisión incondicional, con la "opción de sustituirlo por una multa" de 1.850 dólares (unos

1.375 euros). En 2006, ya cumplió dos meses de cárcel, junto con su director de publicación y su redactor jefe, Madi Ceesay y Musa Saidykhan, por publicar una información errónea, corregida en la siguiente edición, con una rectificación y la presentación de excusas. Gracias a la solidaridad de sus colegas, que le ayudaron a pagar la multa, el periodista pudo evitar el regreso a la cárcel.

Pero, las víctimas de la intolerancia del presidente no siempre son opositores o investigadores críticos. La represión alanza también a las filas de sus fieles. Malick Jones, principal productor del canal público *Gambia Radio and Television Services (GRTS)* y Mam Sait Ceesay, encargado de comunicación de la presidencia gambiana, fueron detenidos el 9 de septiembre por informar al diario progubernamental *Daily Observer* del supuesto despido del director de prensa y relaciones públicas del presidente Yahya Jammeh, lo que resultó ser falso. Los dos hombres fueron acusados también de enviar información al sitio de Internet de la oposición, con sede en Estados Unidos, *Freedom Newspaper*, conocido por su virulenta crítica del gobierno gambiano y que presume de poseer fuentes en el interior de la presidencia. Mam Sait Ceesay pudo salir de la cárcel de Mile Two, en Banjul, el 19 septiembre, tras depositar una fianza de 200.000 dalasis (cerca de 6.730 euros). Malick Jones no salió en libertad hasta el 22 de septiembre de 2007, después de pagar la misma cantidad.

En este contexto de permanente vigilancia, paranoia y brutalidad, sigue publicándose *The Point*, el periódico de Deyda Hydera. Dirigido por Pap Saine, que por otra parte es corresponsal de la agencia *Reuters* en Gambia, el equipo sabe que todas sus ediciones se examinan, desmenuzan y discuten en lo alto. Y que pueden agarrarse a la menor excusa para enviar a la temible NIA a pisar los talones de los periodistas, o dar un puñetazo en los locales del último diario independiente del país.

MAURITANIA

Superficie : 1.025.520 km².

Población : 3.044.000.

Idiomas : árabe, francés.

Jefe del Estado : Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi.

La libertad de prensa es una realidad en Mauritania, incluso a pesar de que los periodistas de Nuakchott tienen que enfrentarse a numerosos y complejos desafíos. Sin embargo, el año 2007 estuvo marcado por una experiencia rara en África : la cobertura equilibrada de las fuerzas políticas en la campaña electoral de las elecciones presidenciales.

Mauritania ha pasado por numerosas pruebas desde el golpe de Estado de agosto de 2005. Transición democrática consensuada, referendum constitucional, elecciones municipales, legislativas y presidenciales justas y transparentes... y el regreso de las libertades civiles, y entre ellas la libertad de prensa. Incluso aunque a los periodistas de Nuakchott aun les queda mucho por hacer, la situación es mucho mejor que antes.

TRATAMIENTO EQUILIBRADO

En su misión de acompañamiento de la transición, iniciada en octubre de 2005, Reporteros sin Fronteras encabezó, en febrero y marzo de 2007, una misión de monitorización de la cobertura de la actualidad electoral en los medios de comunicación públicos mauritanos, con ocasión de las elecciones presidenciales. Se les eligió a ellos porque están sometidos a la reglamentación del código electoral, que garantiza la igualdad de acceso de las fuerzas políticas en liza. Además, en tanto que servicio público financiado por el Estado, tienen obligación de dar ejemplo en período electoral. Al final de su misión, la organización aplaudió los esfuerzos realizados por los medios públicos para respetar las complejas reglas de equidad e igualdad en el tratamiento de los diferentes candidatos, que competían en la elección presidencial. Un reto conseguido gracias al trabajo del órgano de regulación, las direcciones y los periodistas de la radio, la televisión, la prensa escrita y la agencia de prensa.

Más allá de los desequilibrios en las cifras, que no fueron espectaculares, Reporteros sin Fronteras quiso aplaudir sobre todo la disponibilidad y los esfuerzos de la dirección de los medios públicos en una etapa histórica tan sensible, y se felicitó por el pragmatismo y el ánimo constructivo de la Alta Autoridad de la Prensa y el Audiovisual (HAPA), un órgano, creado recientemente, de regulación de los medios.

UNA PRENSA DE ESCÁNDALOS

Desde la caída de la dictadura de Maaouya Ould Taya, en agosto de 2005, los problemas de la prensa mauritana son, a la vez, menos graves y más complejos. Para descalificar a la prensa independiente, una espina clavada en los pies de su poder, el antiguo régimen favoreció una eclosión de periódicos, cuyas direcciones tenían pocos escrúpulos en términos de corrupción y chantaje, y cuyos periodistas buscaban más regalías que informaciones. Ante ese problema, Reporteros sin Fronteras ha dicho siempre a las autoridades mauritanas que la cárcel no era una respuesta, y que sobre todo había que ayudar a la prensa "seria" a sobrevivir en un mercado escaso.

El breve encarcelamiento de Abdel Fettah Ould Ebeidna, director de publicación del diario en lengua árabe *Al-Aqsa*, fue una señal negativa enviada a la prensa mauritana cuando el país se enfrenaba a un escándalo político-mafioso de gran envergadura. El periodista, director de una publicación cuyas prácticas deontológicas resultan a menudo discutibles, pasó cuatro días en la cárcel como resultado de una denuncia por difamación, presentada contra el periódico por el empresario Mohamed Ould Bouamatou. En la edición del 16 de mayo, el diario le acusaba en un gran asunto de tráfico de cocaína, descubierto en la noche del 1 al 2 de mayo por la policía de Nouadhibou (Nord), y en el que estaban implicados el hijo de un ex presidente mauritano, un político y varios hijos de personas notables. El artículo, que mezclaba afirmaciones poco corroboradas con informaciones en tiempo condicional, aseguraba entre otras cosas Mohamed Ould Bouamatou estaba implicado en el caso. Según algunos periodistas mauritanos, preguntados por Reporteros sin Fronteras, los artículos que atacaban a Mohamed Ould Bouamatou fueron encargados y pagados por un clan rival, para descalificar al empresario. El 7 de

MAURITANIA

noviembre, Abdel Fattah Ould Ebeidna fue condenado por ello a un año de prisión incondicional, 50.000 ouguiyas (170 euros) de multa y 300 millones de ouguiyas (un millón de euros) en concepto de daños y perjuicios. Como, en aquel momento, el periodista se encontraba en un país del Golfo, no cumplió la condena.

INFLUENCIAS TRIBALES

Oro problema en Mauritania es que las fuerzas del orden todavía no han adquirido el reflejo de respetar a la prensa, ni mucho menos. Y además, que las influencias familiares o tribales impiden a veces que se sancione a quienes cometen violaciones de la libertad de prensa. Mohamed Mahmoud Ould Moghdad, periodista de la emisora pública *Radio Mauritanie*, se encontraba el 16 de agosto en el Ministerio de Salud para cubrir una visita del Primer Ministro Zein Ould Zeidane. El periodista abandonó la sala unos instantes y, cuando pretendía regresar al lugar en que se celebraba la conferencia, se vio interceptado por el responsable de la guardia del Primer Ministro, Zein Ould Soueydatt. Aunque llevaba el carnet de periodista, Zein Ould Soueydatt ordenó a sus hombres que le pegaran. La HAPA condenó la agresión estimando “que ninguna circunstancia

puede justificar el recurso a la fuerza física contra un periodista en el ejercicio de sus funciones”. Pocos días después, el abogado del periodista reveló que, al día siguiente de la agresión, el fiscal de la República se negó a dar entrada a la denuncia de su cliente, con la excusa de que le faltaban piezas al caso. El 21 de agosto, tras conseguir nuevas pruebas, y entre ellas certificados médicos, el abogado intentó presentar por segunda vez la denuncia. De nuevo, la oficina del fiscal se negó a aceptar el caso.

Sin embargo, esas lógicas clínicas también pueden conseguir que se alcancen compromisos. El 18 de agosto Sidi Mohamed Ould Ebbe, redactor jefe del diario privado *El Bedil Athalith*, fue inculcado de “difamación” como consecuencia de la denuncia que la esposa del Presidente presentó el 14 de agosto. La primera dama le reprochaba la publicación de dos artículos, en los que se decía que utilizaba su posición para pedir financiación para una asociación de caridad, que preside. El director de *El Bedil Athalith* manifestó a la prensa “estar dispuesto a llegar a un compromiso”, aunque lamentó la interpretación que se había hecho de los dos artículos que, según él, “no pretendían atentar contra la primera dama”. De hecho, se llegó a un acuerdo y el caso está ya cerrado.

NIGER

Superficie : 1.267.000 km².

Población : 13.737.000.

Idioma : francés.

Jefe del Estado : Mamadou Tandja.

Cinco periodistas, tres de ellos extranjeros, fueron encarcelados en 2007 por realizar reportajes, o entrevistas, de los rebeldes tuaregs que, a partir de febrero, atacaron puestos militares en el norte del país. El gobierno no puede soportar que la prensa le contradiga, a él, que nunca ha visto en la rebelión otra cosa que un asunto de “personas que cortan las carreteras”.

El 3 de febrero de 2007, un grupo armado tuareg desconocido hasta entonces atacó el cuartel del ejército nigerino en Iférouane, en las montañas del Aïr, matando a tres militares. Pocos días después, el sangriento ataque fue reivindicado por el Movimiento de los Nigerinos por la Justicia (MNJ), una nueva rebelión del norte del país, que reclama más derechos para los tuaregs y un mejor reparto de la riqueza. El letal episodio vino a perturbar de forma duradera el frágil edificio desde el que el presidente Mamadou Tandja había pensado dirigir su país, hasta las elecciones generales previstas para 2010. Pero también irritó considerablemente a las autoridades nigerinas que, estupefactas al ver que los ataques se multiplicaban en esa región donde se encuentran las minas de uranio, acordaron militarmente la zona y silenciaron a todos los periodistas, extranjeros y nigerinos, demasiado interesados en la crisis.

TESTIMONIOS EMBARAZOSOS

En 2007 cinco periodistas, y entre ellos tres franceses, conocieron la cárcel por contradecir la versión impuesta por el gobierno, que clamaba que el MNJ era un grupo de “bandidos armados” y “traficantes de droga”. El primer en ser detenido, a finales de agosto, fue François Bergeron, documentalista independiente que había entrado clandestinamente en Niger para realizar un documental sobre la cultura tuareg. Detenido durante 45 días, salió en libertad el 6 de octubre después de largas y laboriosas negociaciones, entre las autoridades francesas y nigerinas.

Cuando todavía estaba detenido el periodista francés, el 20 de septiembre detuvieron en los locales de la radio a Moussa Kaka, director de la emisora privada *Radio Saraounia*, corresponsal nigerino de *Radio France Internationale (RFI)* y de Reporteros sin Fronteras. Cuatro días más tarde, después de

que el fiscal general le acusara públicamente de “connivencia” con los rebeldes, el periodista, uno de los más célebres y experimentados del país, fue inculcado de “complicidad en complot contra la autoridad del Estado”. Apoyándose en dicha acusación, las autoridades facilitaron a la justicia escuchas telefónicas, abrumadoras según ellas, de conversaciones entre el jefe rebelde Alagi Alambo y Moussa Kaka. Al periodista, que desde hace 15 años cubre la cuestión tuareg, no era la primera vez que le detenían por motivos similares. El 14 de julio fue amenazado públicamente de muerte por el jefe del Estado Mayor del ejército, general Boureima. El Consejo Superior de la Comunicación (CSC), órgano de regulación de los medios de comunicación, suspendió a continuación la programación de *RFI*, porque supuestamente había “difundido algunas informaciones falsas” sobre acontecimientos relacionados con el MNJ. Desde que le detuvieron, Moussa Kaka espera que le juzguen, confiando y proclamando su inocencia. Reporteros sin Fronteras, que pudo visitarle en noviembre en la cárcel civil de Niamey, ha defendido su causa ante las autoridades y ha reafirmado, tras investigar el caso, que está convencida de su inocencia.

Dos semanas después de Moussa Kaka, fue detenido por la policía nigerina de fronteras, en el aeropuerto de Niamey, Ibrahim Manzo Diallo, director de un semanario privado que se publicaba en Agadez, cuando se disponía a embarcar para Francia, donde pensaba seguir un curso de formación. Inculcado de “asociación de malhechores” - una acusación parecida, aunque menos grave, que la de su colega de Niamey, Moussa Kaka -, también está en espera de juicio, en la cárcel de Agadez. El pequeño periódico, de tirada limitada, que este antiguo profesor de letras creó en 2002, tampoco era la primera vez que tenía problemas con las autoridades. En el mes de junio cerraron durante

NIGER

tres meses *Air-Inf*, porque supuestamente había “incitado a la violencia” en el conflicto existente en la región entre el ejército y el MNJ. En julio le detuvo la gendarmería de Agadez, después de que hubiera creado otro semanario. Su adjunto, el periodista Daouda Yacouba, pasó una semana en la celda junto a él y posteriormente quedó en libertad sin cargos. Su acta de acusación está basada en las mismas pruebas : escuchas telefónicas, realizadas en oscuras condiciones, que demuestran la pretendida connivencia del periodista con los rebeldes.

Sin embargo, y a pesar de toda esta serie de malas noticias, Reporteros sin Fronteras señala con satisfacción que, en septiembre y en el momento de emprender una reforma profunda de la justicia, algunos magistrados independientes se hicieron cargo de los casos, esforzándose por no ceder a eventuales presiones políticas. Por otra parte, el 17 de noviembre, el juez de instrucción que se encarga del caso de Moussa Kaka declaró inadmisibles las escuchas telefónicas llevadas a cabo por las autoridades para acusarle. Según el juez, violan el carácter privado de las comunicaciones, garantizado por la Constitución, y se efectuaron sin orden judicial. El ministerio público ha apelado esa decisión que podría desembocar, si la sala de la

acusación confirmara las conclusiones del juez, en la puesta en libertad del corresponsal de *RFI*. Y, por extensión, de Ibrahim Manzo Diallo.

Esa era la situación cuando dos periodistas franceses, Thomas Dandois y Pierre Creisson, fueron detenidos a su regreso a Niamey tras filmar, sin autorización, un reportaje sobre el MNJ en el macizo de Aïr, para el canal franco-alemán *Arte*. Inculcados el 21 de diciembre de “atentado a la seguridad del Estado”, debían comparecer ante la justicia a principios del año 2008.

PROMESAS DE REFORMA

Vistas las cosas el gobierno nigerino, en ese contexto, aplazó para una fecha posterior la prevista reforma de la ley de prensa, suprimiendo las condenas de cárcel para la “difamación” y la “publicación de noticias falsas”. Según confesó el propio Ministro de Comunicación, el nuevo proyecto de ley está preparado, pero tiene esperar el regreso de la paz para ser presentado ante el Parlamento. La prensa nigerina se ha resignado. En el pasado, el gobierno prometió varias veces...mantener las promesas de reforma, efectuadas en 2003 en el transcurso de la campaña de la elección presidencial.



NIGERIA

Superficie : 923.770 km².
Población : 144.720.000.
Idioma : inglés.
Jefe del Estado : Umaru Musa Yar'Adua.

El gigante del Oeste de Africa disfruta de una prensa pletórica e insolente, ávida por revelar las actuaciones de una clase política, frecuentemente corrupta. Pero las autoridades disponen de muchas herramientas para reprimir a esos periodistas demasiado curiosos, o demasiado embarazosos. Los temibles servicios interiores de inteligencia interior son una amenaza permanente.

Puzzle complejo a escala continental, el Estado Federal de Nigeria es con frecuencia una tierra de violencia para la prensa. Con frecuencia se producen apaleamientos, detenciones arbitrarias, incursiones policiales o embargos, tanto en las provincias como en Abuja. Pero, paradójicamente, sus 36 Estados y su Distrito Federal son también un lugar donde florecen decenas de periódicos, radios y televisiones privadas, que a menudo relatan con fruición la infamia de una clase política, corrupta y caprichosa. Y se enfrentan a los mismos riesgos que corren los nigerianos que el poder considera demasiado insolentes.

EL BRAZO ARMADO DEL PODER

A lo largo de este año electoral, en el que Nigeria tenía que elegir su nuevo Jefe de Estado, una vez más el gobierno federal se apoyó en el temible servicio interior de inteligencia, el State Security Service (SSS). Proveedor de las “operaciones puñetazo” del gobierno, también este año el SSS se comportó como un “predador de la libertad de prensa”, calificativo que en 2005 le aplicó Reporteros sin Fronteras.

A comienzos del año 2007 se reanudaron las incursiones policiales. En la mañana del 9 de enero una docena de agentes del SSS invadieron las oficinas de *Leadership*, un diario privado que se publica en Abuja. Las fuerzas de seguridad abandonaron los locales pocos momentos después, tras detener al director general Abraham Nda-Isaiah, al redactor jefe Bashir Bello Akko y al periodista Abdulzeez Sanni. El SSS estaba buscando al periodista Danladi Ndayebo, así como la copia de un artículo publicado el 6 de enero, en el que se denunciaban las maniobras políticas en el interior del partido en el poder que llevaron a la designación de Umaru Musa Yar'Adua como candidato a la próxima elección presidencial. Los agentes del

SSS regresaron a mediodía y sellaron los locales, confiscando los teléfonos móviles de todas las personas que estaban presentes y procediendo a registrar los despachos. Después de encontrar lo que buscaban abandonaron los saqueados locales, llevándose al director general. Los tres periodistas quedaron finalmente en libertad en mitad de la noche, pero se vieron obligados a indicar donde se encontraba Danladi Ndayebo, a quien arrestaron al día siguiente y mantuvieron detenido durante diez horas. Tuvo que revelar la fuente de sus informaciones.

El mismo día, una quincena de agentes del SSS llevaron a cabo una operación similar en el semanario privado *The Abuja Inquirer*. Inspeccionaron los despachos durante tres horas y detuvieron al redactor jefe, Dan Akpovwa, así como al director de publicación, Sonde Abbah. La intervención de los servicios de inteligencia se produjo como consecuencia de que el periódico publicara una investigación titulada : “Obasanjo-Atiku Face-Off : Coup Fear Grips Nigeria” (“Enfrentamiento Obasanjo-Atiku : el temor a un golpe de Estado invade Nigeria”). Los agentes del SSS se marcharon del lugar llevándose 81 CDs, un ordenador, la lista de todos los miembros del periódico y algunas copias de la última edición del mismo.

Por segundo año consecutivo, el SSS trató con brutalidad al canal privado *African Independent Television (AIT)*. El 17 de abril, a pocos días de la votación presidencial y cuarenta y ocho horas después de que un incendio, de origen indeterminado, destruyera sus oficinas de Lagos, los locales de Abuja fueron tomados por asalto por un comando del SSS. Amenazándole con armas de fuego, los agentes de las fuerzas de seguridad ordenaron a todo el personal que se tumbara en el suelo. Antes de abandonar el lugar, los agentes del SSS se apropiaron de varias cassettes dispuestas para su



NIGERIA

emisión, y entre ellas la que se estaba emitiendo en aquel momento, dedicada a una historia de los ocho años de poder civil del presidente saliente, Olusegun Obasanjo. El 11 de abril, el mismo SSS cerró *manu militari* los locales de la radio privada *Link FM*, y del canal de televisión *GTV*, en Lagos, explicando que obedecía “una orden llegada de arriba”.

Y cuando no se dedica a este tipo de incursiones, el SSS es también la fuerza utilizada por las autoridades para poner a los periodistas, sin miramientos, en estado de detención. Así, Jerome Imeime, redactor jefe del semanario privado *Events*, que se publica en Uyo, capital del Estado de Akwa Ibom (Sudestet), fue detenido el 10 de octubre por el SSS, cuando asistía a una ceremonia religiosa. Un testigo ocular contó que le maltrataron antes de llevárselo con destino desconocido. Al periodista, inculcado, juzgado y encerrado por “sedición”, le denunciaron por un artículo en el que aseguraba que el gobernador, Godswill Akpadio, utilizaba fondos públicos para solventar algunas deudas personales, contraídas durante la campaña electoral.

VIOLENCIA COTIDIANA

El SSS, pájaro de mal agüero de las redacciones, no es el único responsable de la violencia policial, casi diaria, que sufren los periodistas nigerianos. También algunos grupos de militantes políticos acalorados, cualquiera de los múltiples cuerpos uniformados del país o las milicias privadas que mantienen a los gobernadores, representan amenazas para todo el mundo de la prensa, desde el director de la publicación hasta los vendedores callejeros, especialmente en las provincias.

El 23 de mayo un centenar de partidarios de un político local, algunos de los cuales iban armados con machetes, irrumpieron en los locales de la *Broadcasting Corporation of Oyo State (BCOS)* en Ibadan (Sudoeste), y los saquearon. Fueron

muchos los trabajadores que huyeron ante la brutalidad de los agresores, pero algunos se quedaron atrapados en los despachos. Al menos una decena de trabajadores resultaron heridos de machetazos. A la mayoría le quitaron el dinero que llevaba, y el teléfono móvil. Dañaron varios vehículos, que estaban aparcados en el garaje de la radio. La emisora tuvo que dejar de transmitir. Esa incursión fue consecuencia de la difusión, en las ondas de la *BCOS*, del anuncio de que la comisión electoral del Estado había decidido mantener las elecciones provinciales del 24 de mayo. Porque, el antiguo Vicegobernador Christopher Alao Akala, candidato del *People's Democratic Party (PDP)*, inmerso desde hacia varios años en una lucha fratricida con el gobernador saliente, Rasheed Ladoja, estaba en contra de que se celebraran en esa fecha. En la misma ciudad, el 11 de septiembre, Tope Abiola, redactor jefe adjunto del diario privado *Nigeria Tribune*, fue golpeado por guardias de prisiones y agentes de policía, hasta que perdió el conocimiento. Había acudido a investigar un motín, reprimido por la policía, de los presos de la penitenciaría de Agadi, que había causado cerca de cuarenta muertos entre los internos. Estos incidentes no son más que algunos ejemplos de los 23 casos de agresiones físicas y las 13 detenciones de periodistas, contabilizados por Reporteros sin Fronteras en 2007.

UN MAL BALANCE

Innumerables apaleamientos de periodistas o vendedores de periódicos con el menor pretexto, periódicos embargados en las imprentas, directores de medios de comunicación encarcelados frecuentemente e inculcados de “sedición”: el balance de los mandatos del presidente saliente, Olusegun Obasanjo, es malo para la libertad de prensa. El año 2007 no fue ninguna excepción y la elección de su sucesor designado, groseramente amañada, no augura nada bueno.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Superficie : 2.344.860 km².

Población : 60.644.000.

Idioma : francés.

Jefe del Estado : Joseph Kabila.

El inmenso territorio congoleño cuenta con cientos de periódicos, así como con decenas de radios y televisiones privadas. Las tensiones políticas están muy vivas y los medios de comunicación, que con frecuencia dependen de los partidos en liza por el poder y de empresarios poco escrupulosos, son el blanco de numerosos arreglos de cuentas, en ocasiones mortales.

Los medios de comunicación congoleños están muy politizados y, en consecuencia, son víctimas de las intensas tensiones políticas que recorren el país. Como consecuencia de la elección presidencial de 2006, fueron particularmente atacados los medios pertenecientes a Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente y derrotado rival de Joseph Kabila en las votaciones. Así, el 21 de marzo de 2007, se interrumpió la señal de los medios de Jean-Pierre Bemba después de que declarara, en una entrevista en lingala, que el Estado Mayor del ejército desviaba cada mes 500 millones de francos congoleños, inicialmente destinados a pagar los salarios de los soldados. En los dos días siguientes, unos enfrentamientos mortíferos enfrentaron, en las calles de Kinshasa, a las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) con la guardia personal del senador Bemba, quien se negaba a que sus hombres se integraran en el ejército regular por considerar que no existían suficientes garantías para su seguridad. En el transcurso de dichos enfrentamientos, algunos hombres uniformados saquearon los locales de *Canal Kin Télévision (CKTV)*, *Canal Congo Television (CCTV)* y la emisora *Radio Liberté Kinshasa (Ralik)*. A partir del 21 de marzo, una gran parte del personal de los medios de Jean-Pierre Bemba estaba escondido, después de recibir frecuentes amenazas de muerte.

Otra muestra de la estrecha vigilancia en la que tienen que vivir los medios privados congoleños es que, poco tiempo después, una chapucera decisión el Ministro de Información redujo al silencio, durante varios meses, a cuatro radios asociativas de Kinshasa y puso en peligro la existencia de otras doscientas, diseminadas por el país. El ministerio estimaba que esos medios no disponían de

licencia de explotación regular, ni de recibo o pruebas de haber pagado las tasas debidas al gobierno. Después, algunas de ellas consiguieron los documentos que probaban que estaban cumpliendo la ley y, entre ellos, un vencimiento negociado con la Dirección General de recaudación administrativa y patrimonial (DGRD). Reanudaron las emisiones el 24 de octubre. Un vacío jurídico rodea el estatuto de las radios asociativas que, sin ayuda del Estado, han jugado un papel determinante informando a la población sobre el proceso de transición y las diferentes fechas electorales, que ha conocido la República Democrática del Congo (RDC) en los últimos años. Finalmente se encontró una solución al acabar el año.

ENCARCELAMIENTOS FRECUENTES

En Kinshasa, y en las provincias, es frecuente que encarcelen a periodistas. Por culpa de una legislación absurda, un elevado nivel de corrupción en todos los sectores de la administración y una política agresiva de las autoridades, las organizaciones de defensa de la libertad de prensa se ven a veces enfrentadas a situaciones kafkianas. Así, Bosange Mbaka, apodado "Che Guevara", editor del periódico *Mambenga*, cumplió diez meses de detención preventiva por un asunto absurdo. Se encontraba, el 21 de noviembre de 2006, enviado por su periódico al Tribunal Supremo de Justicia de Kinshasa, para cubrir una audiencia pública, cuando estalló un enfrentamiento entre algunos soldados y militantes del partido del senador Jean-Pierre Bemba. Los manifestantes incendiaron el edificio del Tribunal Supremo de Justicia. En medio de los golpes, el periodista recogió el teléfono móvil de un militar y fue a entregarlo al puesto de guardia. Le detuvieron a los pocos minutos y le inculparon de

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

“robo de efectos militares”. Finalmente, el periodista quedó en libertad el 7 de septiembre. En total, diez periodistas congoleños pasaron por la cárcel a lo largo del año 2007 y cincuenta y cuatro fueron detenidos por la fuerzas de seguridad, según la organización colaboradora de Reporteros sin Fronteras en la RDC, Periodista en Peligro (JED).

UN CRIMEN ODIOSO

Más allá de estos mini escándalos, habituales en el país, el acontecimiento que más marcó a la prensa congoleña fue un crimen odioso seguido de un escandaloso error judicial. El 13 de junio, alrededor de las 21 horas, dos hombres vestidos de civil y armados con kalachnikovs mataron a Serge Maheshe, periodista y secretario de redacción de la emisora local de *Radio Okapi*, cuando salía del domicilio de un amigo, en un barrio residencial de Bukavu (capital de Kivu Sur, Este). En el momento en que, en compañía de dos amigos, se disponía a montar en su vehículo señalado con la inscripción “UN” (Naciones Unidas), que utilizan los periodistas de la radio para desplazarse, los desconocidos, que estaban esperándole, le dieron orden de echarse en el suelo. Entonces, uno de ellos hizo dos disparos a las piernas del periodista, y luego al pecho. Serge Maheshe, de 31 años, trabajaba en *Radio Okapi* desde 2002 y se había convertido en una de las figuras de la prensa en la región.

Para estupefacción general, el juicio de dos militares que llevaban amas de fuego utilizadas poco antes, detenidos a medio centenar de metros del lugar del crimen, se inició al día siguiente por la noche, en el tribunal militar de Bukavu. Pocas horas después de cometerse el crimen, se ordenó una gran razia, en la que detuvieron a una veintena de personas. Al final del juicio, trufado de aberraciones, se produjo otro giro sorprendente : la condena a muerte, el 28 de agosto, de Freddy Bisimwa y Masasile Rwezangabo, dos civiles conocidos anteriormente por pequeños delitos, y de

dos amigos cercanos de la víctima, Serge Mohima et Alain Shamavu. La sentencia se basaba únicamente en las contradictorias acusaciones de dos gamberros, sin ninguna prueba material y con una ausencia total de móvil. Las demás pistas se ignoraron, o se dejaron sin investigar. El argumento de la acusación no se tenía de pie, y el propio tribunal reconoció la existencia de zonas oscuras en el caso. El juicio solo tenía en cuenta las “confesiones” de los dos principales sospechosos, que durante la instrucción acusaron a los amigos del periodista de ser los autores intelectuales del crimen, sin poder aducir ni móvil ni pruebas. Pocas semanas más tarde, se produjo un nuevo giro : en una carta escrita desde la cárcel, los dos hombres exculpaban a los amigos del periodista y acusaban a dos magistrados militares, de haberles sobornado. Aseguraban que les habían proporcionado pruebas materiales comprometedoras, para poder mantener su argumentación. En espera del juicio de apelación, Serge Mohima y Alain Shamavu continúan encarcelados y condenados a muerte.

Pocas semanas después de Serge Maheshe, un desconocido mató de un disparo en la cabeza, en Goma (Kivu Norte, Este), a Patrick Kikuku Wilungula, fotógrafo independiente que trabajaba en la *Agencia Congoleña de Prensa (ACP)* y *L'Hebdo de l'Est*, un semanario privado que se publica en Kinshasa. Todavía se ignoran la identidad del tirador y los móviles del asesinato.

AMENAZAS PERMANENTES

Finalmente, Reporteros sin Fronteras ha manifestado a lo largo del año su exasperación y preocupación ante la multiplicación de las amenazas que pesan sobre JED, cuyos responsables se ven obligados a vivir en un clima de permanente inseguridad. Aunque, desde hace dos años, sean frecuentes las amenazas de muerte y las injurias, los responsables de JED recibieron en 2007 al menos dos advertencias serias, que les llevaron a abandonar momentáneamente el país.



RUANDA

Superficie : 26.340 km².

Población : 9.464.000.

Idiomas : kinyarwanda, francés, inglés, suahili.

Jefe del Estado : Paul Kagamé.

Continúan manteniéndose las execrables relaciones entre el gobierno y una parte de la prensa independiente, y especialmente las publicaciones más críticas. La agresividad del poder llevó incluso a algunos periódicos a dejar de publicarse. Entre tanto, la periodista Tatiana Mukakibibi recobró finalmente la libertad... tras permanecer once años en detención preventiva.

Aunque el gobierno se defiende de ello, la prensa independiente ruandesa se ve obligada a vivir bajo las fuertes presiones que lleguen desde la cabeza del Estado. En una conferencia de prensa celebrada en los comienzos del año 2007, el presidente Paul Kagame atacó violentamente a Emmanuel Niyonteze, periodista del bimensual *Umuseso*, que le pregunta sobre su acercamiento al presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo. También la prensa gubernamental se mostró agresiva con algunos medios de comunicación, y entre ellos la radio pública norteamericana *Voice of America* (VOA). El 2 de febrero, en una conferencia de prensa, un periodista del semanario público *Imvaho Nshya* llegó incluso a pedir el cierre de VOA, a la que acusaba de favorecer a la oposición ruandesa. Tras expulsar sin explicaciones, en junio de 2006, a Sonia Rolley, corresponsal de la emisora pública francesa *Radio France Internationale* (RFI), el gobierno ruandés ordenó en noviembre el cierre de la emisora, después de romper las relaciones diplomáticas con París.

UN PERIÓDICO DESHONRADO

Pocos meses después, la presión sobre *Umuseso*, bestia negra del gobierno, se acentuó hasta el punto de que el grupo de prensa propietario del semanario, amenazado con repetidos procesos y cuyos periodistas se ven frecuentemente vilipendiados por el poder, suspendió todas sus publicaciones. En un programa emitido el 2 de septiembre de 2007 en la emisora pública *Radio Ruanda* y el canal público *Televisión Ruandesa* (TVR), varios ministros, así como los portavoces del ejército y la policía, hicieron manifestaciones muy agresivas en relación con la prensa privada. El Ministro del Interior anunció entre otras cosas que las autoridades iban a tomar “medidas” con los periodistas que intentan “derrocar” al gobierno. Según él, las fuerzas de policía tienen el deber de detener a

cualquier periodista que divulgue un documento oficial, hasta que confiese quien es su fuente que, a su vez, será castigada. Se trataba de una clara alusión al semanario privado *Umuseso*, que había publicado poco antes un documento clasificado del Ministerio de Defensa.

Testigo de ese lamentable clima, el redactor jefe de *Umuseso* cayó en la trampa en agosto y pasó algunos días en la cárcel por una oscura historia, que tiene todo el aspecto de ser un montaje. Gérard Manzi fue detenido en una estación de autobuses, la noche del 22 de agosto, cuando regresaba a su casa después de tomar unas copas con los amigos. Iba acompañado de una joven menor, preocupado porque se la había encontrado sola, en plena noche, poco antes. Trasladado a la comisaría de policía, a Gérard Manzi le acusaron de violación. Negó la acusación y pidió un careo con la joven pero la policía, pretextando que había perdido las huellas de la víctima, se lo denegó. Le pusieron en libertad una semana más tarde, después de que su abogado presentara testimonios que confirmaban la coartada en el caso de buenas costumbres en que, evidentemente, la policía pretendía implicarle.

Aparte de *Umuseso*, también se vieron acosados todos los periódicos pequeños que se publican en Kigali. Así, a Jean-Bosco Gasasira, director de publicación del bimensual independiente *Umuvugizi*, unos desconocidos le dieron una paliza el 9 de febrero, al caer la tarde. Ingresado en estado crítico en el hospital del rey Faisal, el periodista consiguió finalmente salir del coma el 13 de febrero. A partir de agosto de 2006, Jean-Bosco Gasasira recibió repetidas intimidaciones telefónicas y, cada vez que se desplazaba, le vigilaban agentes del servicio de inteligencia militar. “En algunas de las llamadas procedentes de números privados me amenazaban con golpearme hasta la muerte”, dijo entonces a Reporteros sin Fronteras. Se había



RUANDA

negado a facilitar a las autoridades información acerca de la situación de Bonaventure Bizumuremyi, director del bimensual privado *Umuco*, en fuga desde que también a él le amenazaron seriamente. Frente a esas acusaciones, los servicios de inteligencia acusaron entonces a *Umuco* y otros periódicos privados de buscar una “publicidad fácil”. Por otra parte, las autoridades ruandesas criticaron al periódico *Umuvugizi* por denunciar, como hicieron las otras publicaciones independientes, *Umuco* y *Umuseso*, favoritismo en la gestión del Ministro de Economía y Finanzas, James Musoni.

SECUELAS DEL GENOCIDIO

El genocidio de los tutsis de 1994 dejó tales secuelas en la sociedad ruandesa que cualquier crítica del gobierno se reprime rápidamente, y a veces de manera radical. Así, Agnès Uwimana Nkusi, directora del bimensual privado *Umurabyo*, fue detenida el 12 enero y acusada de “divisionismo”, “sectarismo” y “difamación”. En el juicio reconoció las infracciones que se le imputaban y se declaró culpable, reconociendo “la gravedad de sus escritos” y prometiendo “publicar una rectificación”. *Umurabyo*, una de las pocas publicaciones críticas que salen en Kigali, protagonizó una polémica por publicar un artículo, en el que podía leerse: “Quien mata a un tutsi tiene problemas, pero quien mata a un hutu está libre”. El Alto Consejo de la Prensa, un órgano de regulación de los medios de comunicación controlado por el poder, pidió tres meses de suspensión para el periódico. Todavía no había ratificado la decisión el Ministro de Información, como exige la ley, cuando detuvieron a Agnès Uwimana Nkusi. Salió en libertad al cabo de un año, el 19 de enero de 2008.

De igual manera, el 16 de febrero detuvieron en clase al profesor universitario congoleño Idesbald Byabuze Kataruka, cuando impartía una lección en la Universidad Laica Adventista de Kigali (UNILAK). El fiscal le comunicó que estaba denunciado por “atentado a la seguridad interna del Estado”, “segregación” y “sectarismo”. El tribunal de Kagarama le condenó, el 23 de febrero, a treinta

días de detención preventiva, en espera del juicio. También es profesor de la Universidad Católica de Bukavu (Kivu Sur), en el este de la República Democrática del Congo (RDC), y uno de los creadores de *Mashariki News*, un periódico que en aquel momento había publicado dos números. Redactor desde hace varios años de alarmantes informes sobre la situación humanitaria en la frontera ruando-congoleña, el 8 de junio de 2005 firmó, junto con otras persona, un texto titulado “Alerta Ruanda”, destinado a la agencia de prensa de los misioneros católicos, *Missionary Service News Agency (MISNA)*. Los otros dos firmantes eran una monja italiana y otra congoleña de las Misiones católicas del este de la RDC. El texto era una acerba crítica de la gestión en Ruanda de Paul Kagame y su partido, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), desde su acceso al poder en 1994. Idesbald Byabuze Kataruka salió en libertad el 21 de marzo, le expulsaron del territorio y después le declararon “persona non grata”.

ABSUELTA DESPUÉS DE ONCE AÑOS

De todas maneras, el año terminó con una buena noticia. El 6 de noviembre de 2007 y después de deliberar durante tres horas, un tribunal gacaca absolvió a Tatiana Mukakibibi, ex periodista de *Radio Ruanda*, de los cargos de “genocidio”, “planificación y participación en genocidio” y “distribución de armas” en el sector de Kimegeri, entre abril y julio de 1994. Acusada oficialmente de matar a Eugène Bwanamudogo, que realizaba programas para el Ministerio de Agricultura, la periodista negaba los hechos y aseguraba que se trataba de un montaje. Salió en libertad a los pocos días... tras permanecer once años en detención preventiva. Tatiana Mukakibibi era presentadora y productora de programas en *Radio Ruanda*. Tras el genocidio, en agosto de 1994, trabajó con el abad André Sibomana (antiguo director de *Kinyamateka* y galardonado en 1994 con el Premio Reporteros sin Fronteras – Fundación de Francia, fallecido en marzo de 1998). El 2 de octubre de 1996, la detuvieron e inmediatamente la llevaron al calabozo comunal, donde permaneció internada hasta diciembre de 2006, en condiciones muy penosas.

SOMALIA

Superficie : 637.660 km².

Población : 8.445.000.

Idioma : somalí.

Jefe del Estado : Abdullahi Yusuf Ahmed.

El país más letal de África para los periodistas, un territorio sin gobierno estable desde 1991, pasó un año sombrío. En Somalia que, a pesar de todo, dispone de una prensa diversa diversificada y activa, los periodistas se vieron atrapados en el fuego de los asesinatos a sueldo y tuvieron que hacer frente a la intolerancia de la autoridades de transición.

Una letanía de periodistas asesinados puntuó un año sombrío para la prensa somalí. A Ali Mohammed Omar, joven presentador de la emisora privada *Radio Warsan*, una de las más escuchadas en la región de Baidoa (Centro-Oeste), le mataron de un disparo en la cabeza cuando regresaba a su casa, la noche del 16 de febrero de 2007. Mohammed Abdullahi Khalif, de *Radio Voice of Peace*, en Galkayo, en la región de Puntland, se encontraba el 5 de mayo haciendo un reportaje sobre el mercado de armas de la ciudad cuando le segaron la vida los disparos de unos militares, llegados para recuperar un arma que les habían robado. A Abshir Ali Gabre y Ahmed Hassan Mahad, de *Radio Jowhar*, les mataron en una emboscada tendida, el 15 de mayo, al convoy del gobernador de la provincia de Moyen-Shabelle (Centro-Sur), en el que circulaban. Les capturaron los asaltantes y les apuñalaron repetidas veces, antes de rematarles con una ráfaga de kalachnikov. El 11 de agosto resultó abatido, de varios disparos en la cabeza, el director de la emisora de Mogadiscio *Capital Voice*, Mahad Ahmed Elmi, cuando se dirigía al trabajo. Cuando regresaba de asistir a la ceremonia del entierro de su amigo, Ali Iman Sharmarke, cofundador de la emisora *HornAfrik*, encontró la muerte en la explosión de un artefacto bomba, accionado al paso de su vehículo. El 24 de agosto mataron al periodista de *Radio Banadir* Abdulkadir Mahad Moallim Kaskey, cuando el minibús en que circulaba por el campo de una región del Sudoeste se vio atrapado en el fuego de unos desconocidos. Finalmente, Bashir Nur Gedi, director de otra emisora popular de Mogadiscio, *Radio Shabelle*, fue asesinado por un comando el 19 de octubre, delante de su domicilio y en presencia de su mujer e hijos.

En la mayoría de estos casos las sospechas recayeron en los insurgentes islamistas, que se enfrentan con las fuerzas gubernamentales apoyadas por Etiopía. Los dirigentes de los tribunales islamistas,

expulsados del país por la fuerza y exiliados en Eritrea, donde el gobierno les ha proporcionado ayuda y una tribuna internacional, organizan atentados en Mogadiscio contra los intereses gubernamentales y etíopes. Su "ala militar", un grupo de milicianos radicales conocidos como los "Shabaab" ("La juventud"), da instrucciones a jóvenes asesinos a sueldo circunstanciales, a los que encarga que abatan a los "traidores", sindicalistas, profesores universitarios, militares o periodistas.

UN RECUENTO SINIESTRO

Ocho muertos, cuatro heridos, medio centenar de periodistas en el exilio y los demás retirados en sus casas, después abandonar el oficio : un balance muy grave el de la prensa somalí. A este terrorífico recuento conviene añadir los cincuenta periodistas detenidos en el ejercicio de su trabajo, tanto en Somalia del Sur, donde se encuentra Mogadiscio, como en la región semi autónoma de Puntland (Norted) en el Estado autoproclamado de Somaliland (Noroeste).

Pero, los periodistas somalíes no solo sufren la violencia política en que el país se va hundiendo con los años, sino que también son objetivos predilectos de las autoridades de transición, que les ven como molestos testigos del caos que son incapaces de controlar. La mayoría de las veces la culpa es de las fuerzas de seguridad somalíes que actúan a su aire, franqueando las delgadas reglas del derecho que, supuestamente, el gobierno federal de transición debe hacer respetar. También se sucedieron las detenciones arbitrarias. Quizá el caso más emblemático sea el que, el 21 de marzo, llevó a la detención de Abdulkadir Mohammed Ashir "Nadara" y Bashir Dirie Nalei, periodistas del canal privado *Universal TV*, así como del camarógrafo Hamud Mohamed Osman, al finalizar una conferencia de prensa del presidente Abdullahi Yusuf Ahmed. El entorno del Jefe del Estado consideró

SOMALIA

que habían planteado una pregunta impertinente. Su puesta en libertad, el 22 de mayo, se debió a la fuerte presión internacional.

Entre los asesinatos premeditados y las detenciones arbitrarias, un incidente impactó especialmente en los ánimos. En la mañana del 18 de septiembre de 2007, una unidad de las fuerzas de seguridad somalíes intentó entrar en el inmueble en que se encuentra *Radio Shabelle*, después de que en el barrio arrojaron una granada a una patrulla. Los soldados dispararon varias ráfagas al edificio, especialmente a la planta en que se encuentran las oficinas de la radio, haciendo pedazos los cristales de las ventanas. Después sitiaron el inmueble durante varias horas, antes de autorizar la evacuación del personal. Las oficinas de *Radio Shabelle* están situadas en el centro de Mogadiscio, no lejos del feudo de los insurgentes en que se ha convertido el mercado de Bakara. La zona se ve frecuentemente afectada por enfrentamientos y atentados. Además, el propietario del inmueble forma parte del clan de los Ayr, notoriamente hostil al gobierno de transición.

UNAS IRRITABLES AUTORIDADES LOCALES

La libertad de los periodistas también se convirtió en presa de las autoridades de la región semi autónoma de Puntland, antiguo feudo del presidente del gobierno de transición, Abdullahi Yusuf Ahmed. La fachada marítima de la región se utiliza para el embarque de armas y clandestinos, con destino a los países del Golfo. Pequeños grupos mafiosos, formados sobre bases clánicas y apoyados por sus propias milicias, se reparten el lucrativo tráfico. Sobre la marcha, el norte de Puntland se ha convertido en terreno de caza para las bandas de secuestradores, que han convertido el secuestro y la piratería en una forma de comercio. En mayo secuestraron a dos agentes humanitarios extranjeros, que fueron liberados después de unas negociaciones entre los secuestradores y los jefes familiares. El 16 de diciembre fue secuestrado el camarógrafo independiente francés Gwenlaouen Le Gouil, que se encontraba haciendo un reportaje

para el canal franco-alemán Arte. Le pusieron en libertad la víspera de Navidad. Las reivindicaciones de los secuestradores, una banda conocida por organizar el paso de clandestinos a Arabia Saudí a través de Yemen, eran crapulosas.

Por otra parte, las autoridades locales, apoyándose en la represión policial, se esfuerzan por preservar la aparente estabilidad de la región, que se ha librado de la agitación islamista pero se estremera con las rivalidades territoriales con Somaliland. En ese contexto, a los testigos molestos se les trata sin miramientos. Así, los periodistas independientes Mohamed Gahnug y Faysal Jaama estuvieron unos días detenidos, a finales de septiembre, en la disputada ciudad de Las Anod, después de que tomaran fotografías de las fuerzas de seguridad de Puntland, en un enfrentamiento con el ejército de Somaliland. Igualmente, una treintena de agentes de los servicios de inteligencia de Puntland, que irrumpieron en su despacho, arrestaron el 16 de julio a Abdifatah Dahir Jeyte, productor y presentador de la emisora privada *Radio Voice of Peace* de Bossaso. Su liberación, que se produjo a los dos días, se debió a la movilización internacional y al hecho de que una veintena de colegas, así como el Viceministro del Interior, se concentraron ante el cuartel general de los servicios de inteligencia, protestando por su encarcelamiento.

Pendiente de preservar su reputación de “remanso de paz” al margen de la anarquía somalí, Somaliland también entró en conflicto con la prensa privada, y especialmente con el periódico *Haatuf*. El director de publicación Yusuf Abdi Gabobe, el redactor jefe Ali Abdi Dini y Mohamed Omar Sheikh Ibrahim, corresponsal en la región de Awdal (Noroeste), cumplieron tres meses de cárcel entre enero y marzo. Les persiguió el gobierno por una serie de artículos, en los que denunciaban casos de favoritismo en los nombramientos gubernamentales y la utilización de vehículos oficiales para fines personales. Inicialmente condenados a dos años de cárcel, salieron en libertad gracias a la fuerte movilización de sus colegas, y de organizaciones internacionales.

SUDÁN

Superficie : 2.505.810 km².

Población : 37.707.000.

Idiomas : árabe, inglés.

Jefe del Estado : Omar Hassan al-Bashir.

Todavía este año, la prensa sudanesa que se publica en Jartum constituyó una presa para los servicios de seguridad, poco proclives a dejar que los periodistas estorben la acción del gobierno. Sin embargo, las varias detenciones y un mal clima generalizado no deben ocultar el hecho de que, en este país, los periódicos y la sociedad civil participan activamente en los debates del momento, especialmente en torno a la crisis de Darfour.

Con una treintena de diarios independientes, de todas las tendencias, y una sociedad civil activa y crítica, Sudán es una paradoja. Su mala reputación en el panorama internacional, entre otras cosas a causa de su intransigencia y complicidad con las masacres de Darfour, tiene tendencia a enmascarar la animada vida mediática de Jartum.

Como muchos de los conflictos armados del mundo, la crisis de Darfour plantea complejos problemas de cobertura a los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Estos problemas intrínsecos — múltiples acciones armadas, carencia de “línea del frente” y de distinción entre combatientes y civiles, hostilidad natural del terreno... — se ven intensificados a propósito por el “cierre burocrático” que las autoridades de Jartum han erigido en torno a la zona de conflicto, para intentar “regular” e influir el trabajo de los periodistas. Con ese fin se ha creado toda una panoplia de obstáculos administrativos, o de seguridad : desde la obtención del visado de entrada hasta la prohibición de acceder a los campos de desplazados internos, pasando por la concesión de un “permiso de viaje” especial para Darfour. Después de llevar a cabo una misión de investigación sobre el terreno, Reporteros sin Fronteras publicó un informe sobre la compleja situación a que se enfrentan los periodistas, sudaneses y extranjeros, aclarando entre otras cosas esos obstáculos pero también el carácter plural, activo y exigente de los periódicos de la capital.

Porque en la prensa escrita sudanesa, de un pluralismo real, se puede sentir la voz de los militantes sudaneses de los derechos humanos, los investigadores universitarios locales y algunos medios asociativos en general ; voces que tienen dificultades para hacerse entender en el exterior de Sudán. Lo que evidentemente no es nada fácil, en un país dividido y donde los retos son tan importantes. Así, Faisal El-Bagir, periodista del semanario privado en lengua

árabe *Al-Midan* y corresponsal de Reporteros sin Fronteras en Sudán, así como Abdel Moneim Suleiman, Al-Haj Warraq, Al-Tahir Satti y Rabbah Al-Sadiq Al-Mahdi, todos ellos periodistas del diario privado en lengua árabe *Al-Sahafa*, fueron amenazados de muerte el 4 de diciembre. Abdel Moneim Suleiman contó entre otras cosas que la víspera había recibido amenazas por teléfono, procedentes de Tchad. Un interlocutor anónimo le explicó que alguien, en Sudán, le había ofrecido 220.000 dólares, por matar a cada uno de los cinco periodistas. Aseguró que se habían convertido en blancos a causa de su oposición al gobierno, así como por su apoyo al despliegue de una fuerza internacional en Darfour.

UNOS PERIÓDICOS EN EL PUNTO DE MIRA

Este año, una vez más, el diario privado *Al-Sudani*, conocido por su independencia y visión crítica del gobierno de Jartum, fue un blanco de las autoridades. El 16 de mayo confiscaron en la imprenta las planchas de la edición que iba a salir, y entregaron a los responsables del diario una carta de la fiscalía, ordenándole la suspensión del periódico. Esto ocurrió después de que, aquel mismo día, publicara un editorial firmado por el redactor jefe, en el que acusaba al Ministro de Justicia, Mohamed Ali al-Mardi, “de mentir en un asunto de blanqueo de dinero”, examinado por la justicia. En el mismo caso, el director de publicación y el redactor jefe del diario, Mahgoub Erwa y Osman Mirghani, estuvieron detenidos durante dos y tres días respectivamente, entre el 17 y el 20 de mayo, antes de quedar en libertad sin cargos.

Representativa de uno de los obstáculos más flagrantes a la libertad de prensa en Sudán, la suspensión de *Al-Sudani* es abusiva, en la medida en que fue una decisión unilateral del gobierno, cuando existe un organismo de regulación de la prensa cuyo

SUDÁN

mandato se cortocircuitó. Además, para fundamentar su decisión, el gobierno utilizó una vez más el artículo 130 del código de procedimiento penal, cuando incluso el conjunto de la profesión, y el Consejo Nacional de Prensa, organismo de regulación de los medios de comunicación, contestan su legitimidad. El recurso al artículo 130 del código de procedimiento penal, que sanciona la violación del secreto de instrucción, es una de las armas favoritas de las autoridades. En los comienzos del año, *Al-Sudani* ya había pagado el precio de esa ambigua disposición legislativa, que pretende prevenir “el hecho de influir en los procedimientos en fase de investigación”. El 1 de febrero, el Ministerio de Justicia lo suspendió “indefinidamente”, por hablar del asesinato, en 2006, del redactor jefe del diario *Al-Wifaq*, Mohamed Taha, contraviniendo una orden del gobierno, que había impuesto un black-out sobre el caso con la excusa de “preservar el orden público”. Las protestas de las organizaciones profesionales terminaron por ablandar a las autoridades, al cabo de 48 horas. Mahgoub Erwa y Noureddine Medani estuvieron de nuevo once días encarcelados, en noviembre. Les habían condenado, el 18 de noviembre de 2007, por “difamación” a los servicios de inteligencia, y se habían negado a pagar una multa de 10.000 libras sudanesas (unos 3.500 euros), “para que el gobierno entienda hasta qué punto es injusto encarcelar por expresar una opinión”, según dijo Mahgoub Erwa a la salida de la cárcel.

Otros periódicos también fueron objetivo de unas autoridades frecuentemente irritables. Así, el 28 de

agosto, y recuperando algunas de las viejas prácticas de la policía política sudanesa, unos agentes de los servicios de seguridad irrumpieron en la imprenta de *Al-Midan* y confiscaron la totalidad de los 15.000 ejemplares de la edición que estaba a punto de salir. No dieron ningún motivo oficial. Según Faisal Elbagir, la medida podría tener alguna relación con la publicación de artículos denunciando el embargo, una semana antes, del diario privado en lengua árabe *Al-Rai Al-Chaab*. Añadió que el embargo de *Al-Midan* tenía también el objetivo de ejercer presión económica sobre el periódico, privándole de recursos financieros. Los días 20 y 21 de agosto, seis diarios independientes fueron víctimas de censura, impuesta por los servicios de seguridad. Los artículos en cuestión trataban de la detención de personas sospechosas de fomentar ataques a embajadas occidentales.

TESTIGOS MOLESTOS

Finalmente, los servicios de seguridad sudaneses no dudan en proceder a la detención de periodistas, molestos testigos de las exacciones que cometen. Alfatih Abdoullah, de *Al-Sudani*, Qazafi Abdoulmotalab, de *Al-Ayam*, Abouobaida Awad, de *Al-Rai Al-Chaab*, y Aboulgasim Farahna, de *Alwan*, pasaron una semana detenidos tras ser arrestados el 13 de junio, cuando iban de camino a cubrir una manifestación contra la construcción de una presa en Kijbar, en la región de Dongola (norte del país), en la que la policía disparó, causando cuatro muertos y al menos diez heridos.



ZIMBABUE

Superficie : 390.760 km².
Población : 13.228.000.
Idiomas : inglés, shona, ndebele.
Jefe del Estado : Robert Mugabe.

Desde hace cinco años, el antiguo “granero de trigo” del Africa Austral se hunde en una profunda crisis económica y política arrastrando, en el tormento de la represión, a una de las prensas más vigorosas de Africa. Desde 2002, la vida de los periodistas zimbabuenses está hecha a base de vigilancia constante, brutalidad policial e injusticia.

La prensa zimbabuense es ahora un campo de ruinas. Aunque, en 2007, Reporteros sin Fronteras no registró tantas violaciones de la libertad de prensa como en años anteriores, es porque quedan pocos periodistas por detener, pocos periódicos que cerrar y ningún corresponsal que expulsar. Sigue apareciendo un puñado de publicaciones privadas, pero muy vigiladas y obligadas a hacer concesiones al partido presidencial. Los periodistas que todavía pueden trabajar en el país protegen sus acreditaciones, que les entrega anualmente la todopoderosa Comisión de Medios de Comunicación e Información (MIC). Si les cogieran en el flagrante delito de hacer periodismo sin poseer el preciado ábrete sésamo, se arriesgarían a dos años de cárcel. Las direcciones de las últimas cabeceras que se publican se ven sometidas a fuertes presiones para que adopten la línea del partido en el poder, e impidan trabajar a los periodistas más críticos. Ningún reportero extranjero puede trabajar legalmente en territorio zimbabuense, so pena de ser detenido, exhibido como un trofeo y expulsado tras una condena rápida.

Sin embargo, cuando en 2002 el presidente Robert Mugabe hizo aprobar la “Ley de protección de la vida privada y acceso a la información” (AIPPA), en el antiguo “granero de trigo” del Africa Austral se produjo un relanzamiento mediático sin precedente. Cada mañana, la población se abalanzaba sobre los periódicos, y especialmente el diario privado *The Daily News*. Dirigido por periodistas experimentados, era famoso por sus informaciones fiables, su seriedad y su insolencia con el poder. Cerrado después de unas perversas maniobras judiciales, el *Daily News* lucha desde aquel día para conseguir reaparecer. A pesar de haber obtenido varias decisiones judiciales favorables, las autoridades encuentran siempre alguna respuesta burocrática para impedirlo.

De todas maneras, la vida de los periodistas independientes se ha vuelto imposible. En 2007, dos episodios pusieron de manifiesto de qué forma los

servicios de inteligencia (Central Intelligence Organisation, CIO) se ingieren en la vida de los medios, con desastrosas consecuencias. Al redactor jefe del semanario privado *Financial Gazette* (*FinGaz*), Sunsleey Chamunorwa, conocido por su independencia, le impidieron acceder a su despacho el 13 de marzo, con la excusa de que le habían depuesto de su cargo, sin preaviso. Desde 2001 el periódico pertenece a la CIO, después de una operación financiera que utilizó al gobernador del Banco Central, Gideon Gono, como tapadera. “El redactor jefe se ha mantenido hasta ahora porque Gono se ha negado a plegarse a las presiones del partido en el poder y de la CIO, que se quejaba de la línea editorial del periódico, que supuestamente hacía daño al partido y favorecía al MDC”, [Movement for Democratic Change, principal partido de la oposición], declaró entonces a Reporteros sin Fronteras una fuente del interior del periódico, amparada en el anonimato. Otro incidente similar fue que, el 7 de marzo, Tichaona Chifamba, Presidente Director General de la editora del diario *Daily Mirror*, anunció a sus empleados que el periódico se veía obligado a dejar de salir, a causa de una crisis financiera. La CIO se había hecho con el control del periódico en 2004, después de echar al fundador, Ibbo Mandaza. Desde entonces habían bajado las ventas, no contabilizando más que 2.000 ejemplares diarios, y las deudas se acercaban a los 500 millones de dólares zimbabuenses (alrededor de 1,5 millones de euros).

MANIFESTACIONES DEL 11 DE MARZO

En el aspecto político el año 2007 estuvo marcado sobre todo por los acontecimientos del 11 de marzo. La “concentración de oración”, organizada ese día por el colectivo Save Zimbabwe Campaign (SZC), agrupando Iglesias, partidos de la oposición, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y movimientos estudiantiles opuestos al gobierno



ZIMBABUE

de Robert Mugabe, fue reprimida severamente por la policía. Fueron detenidos y maltratados muchos militantes y personalidades de la oposición, entre los que se encontraban Morgan Tsvangirai y Arthur Mutambara, líderes de las dos facciones de MDC. Tsvangirai Mukwazhi, fotógrafo independiente que colabora en la agencia norteamericana *Associated Press (AP)*, y el periodista independiente y también colaborador de AP Tendai Musiyu, fueron detenidos también y posteriormente puestos en libertad, dos días más tarde.

A las dos semanas, la profesión se enteró con estupefacción de la muerte de Edward Chikomba, camarógrafo freelance y antiguo colaborador del canal público *Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC)*. Su cuerpo, sin vida, apareció el 31 de marzo, dos días después de que al periodista le secuestraran unos desconocidos, sospechosos de ser agentes del servicio de inteligencia. Uno de sus antiguos compañeros aseguró que a Edward Chikomba le acusaban de haber vendido, a medios de comunicación extranjeros, imágenes del opositor Morgan Tsvangirai, con la cara deformada, tras haber recibido una paliza mientras estaba detenido. Desde que se marchó del equipo de producción del programa "Visión 30", emitido hasta 2001 en la ZBC, Edward Chikomba se dedicaba a hacer películas, de manera independiente, para particulares o medios, especialmente extranjeros. No se efectuó ninguna investigación seria de su asesinato.

Al día siguiente fue detenido Gift Phiri, colaborador del semanario privado, publicado en Londres, *The Zimbabwean*. La policía andaba buscando al periodista desde que su periódico comenzó a publicar nombres de policías y políticos implicados en las razias de opositores, militantes de los derechos humanos y periodistas. Cuando, seis días más tarde, se celebró el juicio, el periodista apenas podía sentarse, andar o mantenerse en pie, a causa de los golpes que recibió durante la detención preventiva.

A pesar de que, al final del año, la AIPPA se enmendó en un sentido más liberal, las autorida-

des continúan mostrándose intratables con todos cuantos consideran "agentes del Oeste". Los servicios de inteligencia han elaborado una "lista negra" de al menos quince periodistas de la prensa independiente, mientras se acercan las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para 2008. El 26 de septiembre la prensa independiente zimbabuense publicó el facsimil de una página que llevaba encabezamiento del gobierno, fechada en junio de 2007. En el documento figura, bajo el titular "targeted journalists" ("objetivo periodistas"), una lista de 15 personalidades del mundo de los medios de comunicación, a los que "hay que tener bajo estrecha vigilancia y deben ser detenidos en las diferentes fechas previstas. Trabajan mano a mano con algunos hostiles gobiernos occidentales anti zimbabuenses."

Si se llevaran a cabo reformas democráticas en Zimbabwe, tendrían que dismantelar un aparato de represión muy completo, que no ha dejado de irse actualizando a medida que se han producido progresos tecnológicos. Así, el presidente Mugabe promulgó el 6 de agosto la ley llamada "Interception of Communications Bill", que permite al gobierno y a la policía interceptar, leer o escuchar los correos electrónicos y las comunicaciones por teléfono móvil, sin obligación de iniciar un procedimiento judicial. Una ley que viene a reforzar la paranoia del aparato político y policial, y demuestra hasta qué punto puede llegar la intolerancia de un gobierno. Así, en la noche del 28 de septiembre, un grupo de policías de civil irrumpió entre bastidores del "Theatre in the Park", donde se estaba representando la obra *The Final Push*, del dramaturgo Daniel Maphosa, en la que se burla de la crisis política que atraviesa Zimbabwe desde hace ocho años. En uno de los entreactos, los policías se llevaron a la fuerza en un camión a los actores Sylvanus Mudzvova y Anthony Tongani. James Jemwa, periodista independiente que grababa la obra, fue a su vez detenido cuando pidió a los policías explicaciones sobre la detención de ambos artistas.